

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante, en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad, para invalidar la que hizo lugar a la excepción de finiquito y desestimó la demanda en todas sus partes.

Segundo: Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo, contra la resolución que falle el recurso de nulidad puede deducirse el de unificación, cuando “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia”.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, deriva que esta Corte declarara inadmisibile el recurso si faltan los requisitos de los incisos primero y segundo del mismo artículo. Entre estos requisitos se encuentran el de fundar el escrito e incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema, y el de acompañar copia de las sentencias respectivas.

Tercero: Que, conforme se indica en el recurso, la materia de derecho que se propone uniformar consiste en “determinar si el finiquito pudo tener poder liberatorio en términos amplios como lo sostenido en el fallo, esto es, cuando son próximos a una nueva contratación por parte del mismo empleador y trabajador y en idénticas funciones, y/o en contratos de obra o faena”.

Cuarto: Que el fallo impugnado rechazó el arbitrio de nulidad del demandante, por los motivos de los artículos 477, en relación con 159 N°5, 177 y 184 del Código del Trabajo; y los artículos 1560, 1561, 1563, 1564, 1566, 1681, 1682, 2446 y 2462 del Código Civil; artículos 478 letra b), 478 letra e), en relación con el artículo 459 N° 4 y 6; 477 y 478 letra c) del Código del Trabajo.

En cuanto al primer motivo de nulidad, lo desestimó, puesto que: *“En efecto, el libelo sostiene como fundamento de la impugnación que el finiquito invocado es nulo, por las razones latamente expresadas en el motivo 1°, las que se oponen a los antecedentes de hecho, tanto los analizados como los establecidos en el fallo atacado, conforme a los cuales no existe continuidad en la prestación de los servicios, desde que ella se vio interrumpida en agosto y los primeros días de septiembre; procediendo el actor a suscribir el finiquito ya*



aludido antes de la dictación de la resolución de la Contraloría General de la República que dispuso su reintegro en determinadas hipótesis, la que fue dejada sin efecto por la existencia del citado instrumento. Estos presupuestos de lo decidido fueron establecidos por el tribunal después de consignar que la demandante omitió señalar la forma en que se habrían vulnerado las normas del Código del Trabajo que tienen el carácter de irrenunciables, lo que se estima relevante al encontrarse establecido que se ha interrumpido la relación contractual, por lo que no puede asumirse una contravención de magnitud para justificar la existencia del objeto ilícito alegado; y que tampoco rindió prueba suficiente para acreditar fuerza o error como vicio del consentimiento, y menos, si ella fue injusta o ilegítima, grave y determinante, desde que la aportada fue imprecisa y vaga para dichos fines; considerando que el lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de término de los servicios y aquella en que la parte demandante fue a firmar el finiquito fue suficiente para el estudio y asesoría sobre su firma, de manera que la resolución de la Contraloría General de la República con fecha posterior a la firma del finiquito, por la cual se disponía la reincorporación del trabajador, en ciertos supuestos, fue dejada sin efecto en atención a la existencia del citado finiquito.

Que, en consecuencia, los fundamentos del capítulo que se revisa no pueden ser admitidos, al pugnar con los hechos asentados, por una parte, y suponer la concurrencia de otros no asentados por la insuficiencia de la prueba rendida, por lo que resulta forzoso concluir que no se ha demostrado la ocurrencia de los errores de derecho alegados, ni menos su influencia en lo dispositivo del fallo, lo que determina que éste sea desechado”.

Respecto de la segunda causal de nulidad, lo rechazó, ya que: “el recurso se sustenta en denunciar la infracción de la carga de la prueba y en denunciar que la única valoración razonable de los antecedentes invocados era la que su parte proponía, exposición de motivos dista de satisfacer el estándar de un recurso como el intentado, por la causal propuesta, desde que éste no constituye instancia, y tiene como objeto la cautela de la regularidad y razonabilidad del razonamiento judicial, mediante la imposición al tribunal de la carga de sujetarse a las directrices ya citadas en la labor de análisis probatorio que le es propio. En consecuencia, para la fundamentación de la impugnación por el motivo que se revisa no basta la reiteración de los fundamentos de su postura procesal, porque ellos no pueden ser valorados por esta Corte en sede de nulidad, ni tampoco la expresión de la disconformidad sobre el resultado al que se arribara por el tribunal si se ha omitido desarrollar la manera en que se han quebrantado los principios o directrices citados, lo que no se satisface con la vertida en el apartado que se



revisa, apareciendo, por el contrario, que la carga de la prueba de los hechos alegados, atendidos sus términos, ha sido correctamente asignada en el proceso, motivo por el cual ese fundamento tampoco podrá ser admitido.

Que en estas condiciones, el recurso no podrá prosperar, por su defectuosa fundamentación, teniendo asimismo en consideración para concluirlo, que los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada para resolver la acción deducida, independientemente si fueran compartidos o no por el recurrente, constituyen reflexiones idóneas que permiten entender conforme a los parámetros que la ley ordena considerar, la convicción de la jueza de la instancia, cuyas conclusiones no desbordan los márgenes consagrados en la normativa del ramo, especialmente las máximas de experiencia, la lógica y los principios científicamente afianzados. Que, por lo demás, para el análisis de esta causal, dado que se trata de un vicio formal, se exige que la infracción de las reglas de valoración de la prueba sea “manifiesta”, esto es, evidente, ostensible, indudable, lo que obviamente no se extiende al caso en que la ponderación de los medios de prueba no corresponde a la apreciación particular que el interesado hace de los mismos, razones todas por las cuales el capítulo correspondiente será desestimado”.

En cuanto a la tercera causal de nulidad, la rechazó, ya que: “en cuanto al tercer apartado del recurso, por el cual se reprocha a omisión de análisis de la prueba y de decisión sobre las prestaciones que indica, las que se refieren a períodos posteriores al finiquito suscrito, atendidos su términos, aparece que no podrá prosperar, atendido que los presuntos vicios carecen de influencia en lo dispositivo del fallo. En efecto, como toda nulidad, este arbitrio responde al imperativo de la relevancia, en el sentido que no basta la verificación de un vicio para disponer la invalidación de un fallo, elemento que está expresado en el mismo artículo 478 del Código del Trabajo, al indicar que “No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo (...)”; prescripción que se traduce en la exigencia de demostrar el efecto que ellos tendrían en la decisión, esto es, que su ocurrencia ha posibilitado la decisión de lo debatido en un sentido diverso del que – como se denuncia en este caso- la ponderación de la prueba omitida habría determinado, cuestión que no se produce en la especie, desde que las razones para desestimar la nulidad del finiquito imponen, por la forma de proposición de las pretensiones, el rechazo de los acápites que denuncia silenciados, cuestión que, por lo demás, no es efectiva, al aparecer ellas resueltas en la sentencia impugnada. En consecuencia, el análisis de la prueba que denuncia soslayada, tampoco habría determinado una decisión diversa, al guardar relación con peticiones que están subordinadas a la intención anulatoria del



finiquito que fuera descartada, situación que priva de sustento al motivo alegado por estos hechos”.

Respecto del cuarto motivo de nulidad, lo desestimó, puesto que: *“los agravios que se han denunciado en la especie están vinculados con la noción de debido proceso, la que se encuentra integrada por un conjunto de garantías que la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y en vigencia y las leyes entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se pretende que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que se respeten los procedimientos fijados por la ley y que las sentencias sean debidamente fundadas.*

Que, sin perjuicio de lo dicho, el control que cabe realizar esta Corte, a propósito de un recurso de nulidad, ha sido acotado por el legislador, de manera que, de acuerdo con la formulación legal respectiva, se autoriza la correspondiente anulación únicamente si se está en presencia de una vulneración sustancial de los derechos o garantías fundamentales, teniendo para ello presente que los aspectos tutelados por el motivo que se invoca abordan dimensiones diversas de las ya previstas expresamente en la ley procesal, como ocurre con los motivos de invalidación previstos en el artículo 478 del Código del Trabajo, que miran precisamente a la forma de las sentencias, cautelando la relación del juez con el objeto de la litis, velando por el respeto a las formas de las sentencias, la resolución integral de los puntos propuestos, mediante una resolución fundada en los parámetros que la ley impone considerar.

Que, en consecuencia, no tienen la capacidad de configurar la causal que se propone, la denuncia de haber dirimido la litis sin fundamentos, omitiendo hacerse cargo de los medios de prueba ofrecidos y acompañados, por cuanto dicha descripción de hecho ha sido recogida en causales precisas y determinadas diferentes de la alegada en este caso, ya deducidas en autos y descartadas en los motivos que preceden, por lo que su renovación a título de esta hipótesis no puede ser admitida, lo que determina su desestimación”.

Y, en cuanto a la última causal de nulidad, la rechazó, puesto que: *“tampoco puede prosperar la causal deducida en el punto VIII.- del recurso, sustentada en lo previsto en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, y cuyo fundamento se remite a lo consignado en los capítulos que preceden en el mismo libelo, porque semejante descripción desatiende el objetivo de la hipótesis propuesta, se aparta de su carácter de derecho estricto y da cuenta de una abdicación del deber de fundarlo debidamente, estado de cosas que impone su rechazo”.*



Quinto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, las sentencias emanadas de la Corte de Apelaciones de Rancagua en antecedentes N° 83-2019 y por esta Corte en Rol N° 21.313-2019.

En el primero, desestimó el recurso de nulidad, al concluir que la sentencia impugnada no cometió infracción legal al decidir desestimar la excepción de finiquito, puesto que todos los instrumentos suscritos desde el 13 de febrero de 2016 en adelante carecieron de poder liberatorio, por lo que accedió y declaró la relación laboral de carácter indefinido desde el 6 de enero de 2016 al 9 de octubre de 2018.

Y, en el segundo, se desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia, en cuanto a no reconocer el efecto liberatorio a los finiquitos, que pese a cumplir con las formalidades del artículo 177 del Código del Trabajo, no ocasionaron el término de los servicios, los que se siguieron prestando de forma permanente e ininterrumpida entre el 6 de enero de 2016 al 9 de octubre de 2018.

Sexto: Que, como se señaló, para dar curso al recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regula la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada, desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con el que sustenta el fallo de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, el demandante fue contratado para prestar servicios como fiscalizador de medidas sanitarias en el marco de la contingencia sanitaria, determinando que no existe continuidad en la prestación de los servicios, la que se ve interrumpida en el mes de agosto y los primeros seis días del mes de septiembre, suscribiendo contrato de trabajo el 7 de septiembre de 2020, vigencia que se extendió hasta el 7 de septiembre de 2020 al 31 de octubre de 2020, además que no acreditó un vicio del consentimiento en la suscripción del finiquito; a diferencia de lo ocurrido en las sentencia aparejadas, puesto que el presupuesto



para desestimar la fuerza liberatoria de los finiquitos dice relación con la continuidad en la prestación de los servicios.

Octavo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.

Regístrese y devuélvase.

N°32.634-2024.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., Mario Carroza E., Ministra Suplente María Carolina Uberlinda Catepillán L. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

